



SG.
PARA DIRECTORIO & JUNTA DE ACCIONISTAS

18/12/2025

MEMORANDO AJ-510-2025



PARA: PRESIDENCIA EJECUTIVA

DE: ASESORÍA JURÍDICA

ASUNTO: INFORME DE VIABILIDAD JURÍDICA PARA LA CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE PAGOS DEL SECTOR ELÉCTRICO

FECHA: 18 de diciembre de 2025

I. COMPETENCIA

De acuerdo al Art. 65 de la actualización del Manual Orgánico Funcional de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., el cual establece que Asesoría Jurídica: *"Es el organismo encargado de asesorar y asistir legalmente a los órganos de gobierno, administración, Presidente Ejecutivo y directores departamentales; para asegurar que los asuntos de derecho público, tributario, laboral, civil, societario, administrativo y demás ramas de derecho que requiera la Empresa, se gestionen de acuerdo al marco constitucional y legal vigente; y, en función del mejor interés institucional"*.

El artículo 66, literal a), ibídem prevé que, una de las funciones de Asesoría Jurídica es: *"Asesorar y asistir en temas legales, a todos los niveles de la estructura administrativa de la empresa"*.

En el referido marco de competencias es necesario indicar que Asesoría Jurídica no es un órgano operativo de control, creación, seguimiento o implementación de procesos internos de los Departamentos de la EEASA. Cada Director Departamental de la Empresa es responsable de los procesos y procedimientos a su cargo, por lo que, en ejercicio de sus competencias, deben determinar la oportunidad, mérito y conveniencia de sus decisiones en el desarrollo de su gestión.

II.- ANTECEDENTES:

2.1. La Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. –EEASA– fue constituida como sociedad anónima mediante escritura pública otorgada el 29 de abril de 1959, inscrita en el Registro Mercantil de Ambato bajo el número 11, el 05 de mayo del mismo año, y cuyos estatutos fueron reformados y codificados íntegramente mediante escritura pública otorgada el 14 de junio de 2013 ante el Notario Quinto del cantón Ambato, en la que se establece su régimen jurídico.





estructura orgánica y objeto social orientado a la prestación del servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica en su área de concesión;

2.2. De conformidad con su **Estatuto vigente**, la EEASA tiene por objeto la **generación, distribución y comercialización de energía eléctrica** dentro de su área de concesión, actividad que desarrolla como prestadora de un **servicio público estratégico**, sujeta al marco constitucional y legal del sector eléctrico ecuatoriano.

2.3. La estructura orgánica y de gobierno de la EEASA se encuentra conformada por la **Junta General de Accionistas**, el **Directorio** y el **Presidente Ejecutivo**, correspondiendo a la Junta General de Accionistas la calidad de **órgano supremo de la sociedad**, con atribuciones para autorizar los actos que comprometan el patrimonio, la estructura financiera o las decisiones estratégicas de la Compañía, conforme a la Ley de Compañías y al Estatuto.

2.4. El sector eléctrico ha sido definido por la Constitución de la República del Ecuador como un **sector estratégico**, cuya regulación, control y gestión corresponden al Estado, garantizando la continuidad, calidad, eficiencia y sostenibilidad del servicio público de energía eléctrica, conforme a lo previsto en los artículos 313 y 314 de la Norma Suprema.

2.5. El **15 de junio de 2025**, el Presidente Constitucional de la República expidió el **Decreto Ejecutivo Nro. 32**, mediante el cual se reformó el Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, incorporando, entre otras disposiciones, la **obligación para las empresas de distribución de constituir fideicomisos** con el aporte de la totalidad de la recaudación del usuario final por concepto del servicio público de energía eléctrica y alumbrado público general, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del orden de prelación de pagos que establezca la Agencia de Regulación y Control de Electricidad – ARCONEL.

2.6. La **Disposición Transitoria Décima Quinta** del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, incorporada por el referido Decreto Ejecutivo Nro. 32, establece un plazo de **ciento ochenta (180) días** contados desde la entrada en vigencia de dichas reformas, para que las empresas distribuidoras constituyan el fideicomiso correspondiente, excluyendo expresamente de la recaudación fideicomitada los valores cobrados por cuenta de terceros, así como los demás ingresos propios de la empresa de distribución.

2.7. Mediante **Oficio Nro. MAE-SDCEE-2025-1033-OF**, de 09 de noviembre de 2025, el Ministerio de Ambiente y Energía, a través de la Subsecretaría de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, en ejercicio de la rectoría del sector, socializó a las empresas distribuidoras los instrumentos habilitantes para la constitución de fideicomisos, remitiendo modelos referenciales de informes

3

técnico, financiero y jurídico, así como una minuta estándar de constitución del fideicomiso, disponiendo su **adaptación a la realidad de cada empresa**, sin alterar las condiciones esenciales del encargo fiduciario.

2.8. En atención a la normativa citada y a las disposiciones emitidas por el ente rector del sector eléctrico, la **EEASA se encuentra realizando el análisis institucional de viabilidad jurídica, financiera y operativa** para la constitución del fideicomiso dispuesto por el Decreto Ejecutivo Nro. 32, a fin de determinar la procedencia normativa del instrumento, su impacto en la gestión financiera y operativa de la Compañía, y las condiciones requeridas para su implementación conforme a su Estatuto Social y al marco legal aplicable.

2.9. En este contexto, el presente informe tiene por objeto emitir un **pronunciamiento de viabilidad jurídica**, circunscrito al análisis de la procedencia normativa de la constitución del fideicomiso, sin pronunciarse sobre aspectos técnicos, financieros u operativos, los cuales deberán ser analizados y sustentados por las áreas competentes de la EEASA y, de corresponder, sometidos al conocimiento y autorización de los órganos societarios competentes.

III.- MARCO NORMATIVO:

3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (CRE):

“Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.”

“Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”

“Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”

“Art. 286.- Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. (...).”



“Art. 287.- Toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. Solamente las instituciones de derecho público podrán financiarse con tasas y contribuciones especiales establecidas por ley.”.

“Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. - Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. - Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.”.

“Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley. - El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios”.

“Art. 315.- El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas.

Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. (...)”.

3.2. CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO (COA):

“Art. 14.- Principio de juridicidad. La actuación administrativa se somete a la Constitución, a los instrumentos internacionales, a la ley, a los principios, a la jurisprudencia aplicable y al presente Código. - La potestad discrecional se utilizará conforme a Derecho.”.

“Art. 22.- Principios de seguridad jurídica y confianza legítima. Las administraciones



públicas actuará bajo los criterios de certeza y previsibilidad. (...)"

"Art. 122.- Dictamen e informe. El dictamen y el informe aportan elementos de opinión o juicio, para la formación de la voluntad administrativa. (...)"

"Art. 123.- Alcance del dictamen o informe. El dictamen o informe se referirá a los aspectos objeto de la consulta o del requerimiento; a las materias objeto de la competencia del órgano emisor y a los aspectos que incumben a la profesión, arte u oficio, de los servidores públicos que lo suscriben."

3.3. CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO:

"Art. 109.- Del contrato de fideicomiso mercantil.- Por el contrato de fideicomiso mercantil una o más personas llamadas constituyentes o fideicomitentes transfieren, de manera temporal e irrevocable, la propiedad de bienes muebles o inmuebles corporales o incorporales, que existen o se espera que existan, a un patrimonio autónomo, dotado de personalidad jurídica para que la sociedad administradora de fondos y fideicomisos, que es su fiduciaria y en tal calidad su representante legal, cumpla con las finalidades específicas instituidas en el contrato de constitución, bien en favor del propio constituyente o de un tercero llamado beneficiario.

El patrimonio autónomo, esto es el conjunto de derechos y obligaciones afectados a una finalidad y que se constituye como efecto jurídico del contrato, también se denomina fideicomiso mercantil; así, cada fideicomiso mercantil tendrá una denominación peculiar señalada por el constituyente en el contrato a efectos de distinguirlo de otros que mantenga el fiduciario con ocasión de su actividad.

Cada patrimonio autónomo (fideicomiso mercantil), está dotado de personalidad jurídica, siendo el fiduciario su representante legal, quien ejercerá tales funciones de conformidad con las instrucciones señaladas por el constituyente en el correspondiente contrato.

El patrimonio autónomo (fideicomiso mercantil), no es, ni podrá ser considerado como una sociedad civil o mercantil, sino únicamente como una ficción jurídica capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones a través del fiduciario, en atención a las instrucciones señaladas en el contrato."

"Art. 110.- El contrato de fideicomiso mercantil deberá otorgarse mediante escritura pública.

La transferencia de la propiedad a título de fideicomiso se efectuará conforme las disposiciones generales previstas en las leyes, atendiendo la naturaleza de los bienes. *D*



El fideicomiso mercantil tendrá un plazo de vigencia o, podrá subsistir hasta el cumplimiento de la finalidad prevista o de una condición. (...).

3.4. CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS (COPLAFIP):

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA PRIMERA.- Los recursos públicos de las empresas públicas nacionales y de las entidades financieras públicas podrán gestionarse a través de fideicomisos, previa la autorización del ente rector de finanzas públicas. No estarán sujetas a esta limitación los recursos de personas jurídicas de derecho privado en la banca pública y las entidades financieras públicas.

En casos excepcionales, las entidades del sector público, que no son empresas públicas nacionales ni de las entidades financieras públicas, se podrán gestionar a través de fideicomisos constituidos en instituciones financieras públicas, previa autorización del ente rector de las finanzas públicas.

Para la constitución de fideicomisos con recursos públicos por cualquier entidad pública deberá ser comunicada al ente rector de las finanzas públicas.”.

3.5. LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS (LOEP):

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.2.1.5 de la Disposición Transitoria Segunda “Régimen transitorio de las sociedades anónimas a empresas públicas” de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. –EEASA–, por estar comprendida en el Mandato Constituyente No. 15, continuará operando como compañía anónima regulada por la Ley de Compañías exclusivamente en lo relativo a asuntos de orden societario, y para los demás aspectos, tales como el régimen tributario, fiscal, laboral, contractual, de control y de funcionamiento, se sujetará a las disposiciones de la Ley Orgánica de Empresas Públicas;

3.6. LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (LOSPEE):

“Art. 49.- De la liquidación comercial.- Las compras y ventas de energía eléctrica que se realicen entre los participantes del sector eléctrico a través de contratos, así como las transacciones de corto plazo, serán liquidadas por el Operador Nacional de Electricidad, CENACE, dentro del ámbito de sus competencias, sobre la base de la regulación expedida para el efecto por el ARCONEL. El Operador Nacional de Electricidad, CENACE determinará los valores que deberán abonar y percibir cada participante. De igual manera, liquidará los valores que correspondan”



por el servicio de transmisión de electricidad y las transacciones internacionales de electricidad. Art. (...).- (Agregado por el numeral cinco de la Disposición Reformatoria Primera de la Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa Privada en la Generación de Energías Calificada como Urgente en Materia Económica, R.O. 673-8S, 28-X-2024).- El cobro y pago de las obligaciones derivadas de las transacciones comerciales de la demanda regulada, se realizará conforme el orden de prelación, definido por la ARCONEL a través de regulación. Para el efecto, las empresas de distribución podrán constituir un fideicomiso con el aporte de la recaudación del usuario final por concepto del servicio público de energía eléctrica y alumbrado público general, que aseguren el cumplimiento del orden de prelación establecido, observando lo previsto en esta Ley y en la normativa expedida por la ARCONEL y el Ministerio del Ramo. La recaudación fideicomitida no incluirá los pagos y cobros que se recauden por cuenta de terceros, tales como las tasas de recolección de basura y aseo público, y cualquier otro valor que se recaude por conceptos distintos al servicio público de energía eléctrica; estos valores deberán ser entregados en su integridad a la empresa de distribución que corresponda, para que realice los pagos a su titular de conformidad con la Ley.”.

3.7. REGLAMENTO GENERAL DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS:

“Art. 181.- Gestión de recursos públicos a través de fideicomisos.- Los gobiernos autónomos descentralizados, las empresas públicas y las entidades financieras públicas que decidan gestionar recursos públicos a través de fideicomisos deberán solicitar la autorización correspondiente al Ministerio de Economía y Finanzas. Previamente a la autorización, el Ministerio de Economía y Finanzas emitirá un informe acerca de la conveniencia o no de que se autorice el manejo de los recursos públicos a través de esta figura financiera. Estas entidades informarán semestralmente al ente rector de las finanzas públicas sobre la gestión de los recursos a través de tales fideicomisos.

Ningún fideicomiso público deberá mantener recursos por fuera de la banca pública e instituciones financieras cuyo capital accionario sea mayoritariamente con recursos públicos y sus inversiones se sujetarán a las disposiciones que sobre la materia emita el Ministerio de Economía y Finanzas, para lo cual emitirá una norma técnica.”.

3.8. REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA:

“Art. 26.1.- De las formas de garantía del pago de obligaciones contractuales.- (Agregado por el Art. 6 del D.E. 32, R.O. 62-8S, 18-VI-2025) El Estado, y/o las distribuidoras, podrá(n) establecer las siguientes formas de garantía como herramientas para garantizar el pago de sus obligaciones”

contractuales en los contratos de concesión y/o contratos regulados del sector eléctrico, mismos que deben estar alineados a la normativa vigente en materia de planificación y finanzas públicas. Dentro de los cuales se encuentran: a) Fondos contingentes: Es cualquier mecanismo o instrumento que permita provisionar recursos cuyo destino sea exclusivamente la cobertura del pago de las obligaciones contractuales asumidas por el Estado, pudiendo estos recursos provenir de sus instituciones, empresas o de terceros, conforme la normativa aplicable definida por el ente competente; b) Fideicomisos: Es cualquier modalidad de mandato, constituido para la administración de los recursos destinados al pago, a la administración de los fondos, o a la cobertura de los riesgos de uno o varios proyectos; c) Garantías de pago, crédito o liquidez: Es cualquier mecanismo o instrumento financiero que pueda ser utilizado para asumir directamente los pagos, financiar total o parcialmente las obligaciones o proveer de liquidez para cubrir los compromisos contractuales del Estado. Este respaldo puede ser provisto por el propio Estado, sus instituciones, sus empresas, o por terceros, conforme la normativa aplicable definida por el ente competente; y, d) Otros instrumentos de pago: Son todos aquellos que sirvan para cubrir riesgos de obligaciones contractuales de pago, según lo establecido por el ente rector de las finanzas públicas, de conformidad con la normativa vigente del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas. Para definir las garantías de pago, se deberán considerar las características específicas de cada proyecto. También podrán establecerse mecanismos que cubran varios proyectos, siempre que los análisis técnicos, legales y financieros justifiquen los beneficios de esta modalidad. Previo al establecimiento de cualquiera de estos mecanismos, se requerirá el pronunciamiento favorable del ente rector de las finanzas públicas en los términos establecidos en la normativa vigente.”.

“Art. 42.- Liquidación de Transacciones Comerciales.- (Reformado por el Art. 12 del D.E. 540, R.O. 142-5S, 6-IX-2022; Reformado por el Art. 12 del D.E. 32, R.O. 62-8S, 18-VI-2025).- El CENACE determinará mensualmente los montos de energía tranzados entre los participantes mayoristas del sector eléctrico, así como los valores que dichos participantes deban pagar y cobrar por las transacciones realizadas en cumplimiento de los contratos regulados, por las transacciones de corto plazo y, por los peajes de transmisión y de distribución. Para la liquidación se considerará lo siguiente: a) La energía producida por generadores públicos se destinará para cubrir únicamente contratos regulados; b) (Reformado por el Art. 9 del D.E. 239, R.O. 575-3S, 11-XI-2021; y Sustituido por el Art. 24 del Título II de la Ley s/n, R.O. 507-S, 28-II-2024).- La energía producida por generadores privados, de economía popular y solidaria, estatales extranjeras, consorcios y asociaciones que obtuvieron su título habilitante a través de un proceso público de selección (PPS) o que se acogieron a condiciones preferentes, se asignará a los contratos regulados conforme lo establecido en las condiciones del respectivo proceso de selección o la normativa emitida por la Agencia de Regulación y Control competente del sector eléctrico, respectivamente ; c) (Sustituido por el Art. 24 del



Título II de la Ley s/n, R.O. 507-S, 28-II-2024).- La energía de generadores privados, de economía popular y solidaria, estatales extranjeras, consorcios y asociaciones que obtuvieron su título habilitante fuera de un proceso público de selección (PPS) o que no se acogieron a condiciones preferentes, será asignada primero a los contratos bilaterales y luego a los contratos regulados, en caso de haberlos suscrito; y, d) (Sustituido por el Art. 24 del Título II de la Ley s/n, R.O. 507-S, 28-II-2024).- La energía producida por autogeneradores, se asignará primero a su autoconsumo luego a los contratos bilaterales, después a los contratos regulados, en caso de haberlos suscrito. e) (Agregado por el Art. 11 del D.E. 32, R.O. 62-8S, 18-VI-2025) La energía comprada por generadores privados, de economía popular y solidaria, estatales extranjeras y autogeneradores para cubrir sus déficits horarios de generación requeridos para abastecer sus consumos propios y contratos bilaterales, se valorará considerando los mismos cargos establecidos en sus contratos regulados para la venta de excedentes. La determinación de los montos económicos que se deriven de los contratos bilaterales será responsabilidad de las partes suscriptoras. El CENACE publicará y remitirá la liquidación efectuada a los participantes mayoristas del sector eléctrico para que procedan con las actividades de facturación, observando los plazos establecidos en la regulación emitida por la ARCONEL. El cobro y pago de las obligaciones derivadas de las transacciones comerciales de la demanda regulada, se realizará conforme un orden de prelación, definido por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL) a través de regulación, donde tendrá el primer orden de prelación el pago a los participantes privados que ejecuten Proyectos de Generación y/o Transmisión; y, se dará un trato preferente a la participación de la economía popular y solidaria y de empresas públicas que realicen alianzas estratégicas o consorcios con participación de capital privado. Para el efecto, las empresas de distribución deberán constituir fideicomisos con el aporte de la recaudación del usuario final (demanda regulada), que aseguren el cumplimiento del orden de prelación establecido, observando la ley y normativa vigente. La Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL) establecerá los precios de reserva (costos máximos) de las alianzas estratégicas. La recaudación de los valores fideicomitados no incluirá los pagos y cobros que se recauden por cuenta de terceros, tales como tasas de recolección de basura o aseo público; y, cualquier otro valor que se recaude por conceptos distintos al servicio público de energía eléctrica y al servicio de alumbrado público general, valores que deberán ser entregados en su integridad a la empresa de distribución que corresponda, para que realice los pagos a su titular de conformidad con la ley.”.

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA QUINTA. - (Agregado por el Art. 35 del D.E. 32, R.O. 62-8S, 18-VI-2025) Las empresas de distribución deberán constituir un fideicomiso en el plazo de ciento ochenta (180) días, contados desde la entrada en vigencia de las reformas previstas en el Decreto Ejecutivo No. 32 del 15 de junio de 2025, con el aporte de la totalidad de la recaudación del usuario final por



concepto del servicio público de energía eléctrica y alumbrado público general, que aseguren el cumplimiento del orden de prelación de pagos establecido mediante regulación aplicable. La recaudación fideicomitida no incluirá los pagos y cobros que se recauden por cuenta de terceros, tales como las tasas de recolección de basura y aseo público, contribución al cuerpo de bomberos y cualquier otro valor que se recaude por conceptos distintos al servicio público de energía eléctrica y alumbrado público en general; así como los valores correspondientes a otros ingresos de la distribuidora, donde los primeros serán entregados a los respectivos beneficiarios y los segundos a la empresa de distribución.”.

3.9. RESOLUCIÓN NRO. ARCONEL -017/2024 Costos del Servicio Público de Energía Eléctrica para el Año 2025:

“Art. 2.- Disponer a las empresas eléctricas públicas de generación, Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP - Unidad de Negocio Transelectric, y empresas eléctricas de distribución y comercialización del país contenidas en el precitado Informe Nro. INF-DTRET-2024-043, lo siguiente:

2.1. Efectuar las acciones que correspondan a fin de dar su estricto cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución a partir del 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025.

2.2. La gestión de los recursos aprobados y asignados es responsabilidad de las empresas eléctricas y responderá a las prioridades de atención y prestación del servicio público de energía eléctrica a los consumidores.”.

3.10. RESOLUCIÓN NRO. ARCONEL-018/2024 Costo del Servicio de Alumbrado Público General para el Año 2025:

“Art. 2.- Disponer a las empresas eléctricas de distribución del país, lo siguiente:

2.1. Efectuar las acciones que correspondan a fin de dar su estricto cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución a partir del 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025.

2.2. La gestión de los recursos aprobados y asignados, es responsabilidad de las empresas eléctricas de distribución y responderá a las prioridades de atención y prestación del servicio de alumbrado público general concordante con la política emitida por el Ministerio de Energía y Minas.”



3.11. NORMATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE LAS FINANZAS PÚBLICAS:

“NTT 14. AUTORIZACIÓN PARA: CONSTITUIR, REFORMAR, ADHERIRSE O CESIONAR DERECHOS DE FIDEICOMISOS MERCANTILES, SOLICITADAS POR ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación corresponde a todas las entidades que conforman el sector público, incluirá las empresas de Economía Mixta y las Sociedades Anónimas con participación mayoritariamente pública y en los casos en los que existe una duda razonable de la naturaleza de la entidad o de los recursos que administra, se solicitará un pronunciamiento jurídico al respecto.”

“ALCANCE

Esta normativa se aplica conforme a la Disposición General Décima Primera del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en lo relativo a los fideicomisos constituidos por las empresas públicas de la función ejecutiva y las entidades financieras públicas. De la misma manera, regula los casos excepcionales en que el resto de las entidades del sector público, podrán gestionar recursos a través de fideicomisos.

En todos los casos, indistintamente del origen de los recursos, activos, bienes o derechos, las entidades del sector público que actúen como constituyentes deberán solicitar la autorización al ente rector de las finanzas públicas, para la constitución del fideicomiso mercantil, adherirse a éste, o para realizar reformas a los contratos que afecten al objeto, constituyentes o beneficiarios, así como también para las cesiones de derechos fiduciarios que realice una entidad del sector público que actúe en calidad de cedente.”.

“CASOS EN QUE EL ENTE RECTOR DE LAS FINANZAS PÚBLICAS AUTORIZARÁ LA CONSTITUCIÓN DE UN FIDEICOMISO

Tratándose de las empresas públicas de la función ejecutiva y las entidades financieras públicas, éstas podrán constituir fideicomisos mercantiles para cualquier operación que se encuentre dentro de su giro de negocio y que no la puedan realizar con los procedimientos regulares de la entidad, o que pudiendo hacerla, sea necesario para optimizar la gestión en temas específicos, previa la autorización del ente rector de las finanzas públicas.”.

“ÓRGANO RECTOR DEL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE FIDEICOMISOS MERCANTILES”



El ente rector de las finanzas públicas es el designado por ley para otorgar la autorización para gestionar recursos públicos a través de fideicomisos mercantiles constituidos por entidades del sector público en los términos previstos en la Disposición General Décima Primera del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. La coordinación del proceso de autorización será ejercida por la Unidad Responsable del Tesoro Nacional.”.

“REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN DEL FIDEICOMISO MERCANTIL

Las entidades del sector público, previo a la suscripción del contrato de constitución de un fideicomiso mercantil, deberán presentar la solicitud de autorización al ente rector de las finanzas públicas, adjuntando: En los casos que se aplique, copia simple del contrato o acto administrativo que sustente la necesidad de constituir un fideicomiso mercantil. - La minuta del contrato de fideicomiso mercantil, que debe contener los requisitos dispuestos en el Código Orgánico Monetario y Financiero Libro II - Ley de Mercado de Valores y demás normas conexas. - Análisis técnico y legal que sustente que la modalidad de contratación elegida a través de la constitución del fideicomiso mercantil, es la mejor alternativa en términos de eficiencia, eficacia y sostenibilidad fiscal, considerando la posibilidad de contingencias fiscales, en los casos que aplique. - La información financiera, técnica y legal de la entidad, que sea requerida por el ente rector de las finanzas públicas para realizar el análisis de sostenibilidad financiera y disponibilidad de recursos.

En caso de que el fideicomiso se encuentre asociado a una operación de financiamiento o endeudamiento público, se deberá presentar las autorizaciones y requisitos establecidos en la ley para este tipo de operaciones.

En caso de que las mismas se encuentran aún en trámite, se podrá avanzar con el análisis correspondiente, pero no se gestionará la emisión de la autorización hasta contar con dichos requisitos cumplidos.”.

“33. De requerirlo, el ente rector de las finanzas públicas verificará la sostenibilidad financiera del fideicomiso mercantil en el tiempo, y la capacidad de las entidades para asumir pasivos contingentes, si fuera el caso, sin comprometer el equilibrio presupuestario en el corto, mediano o largo plazo, ni la prestación regular de los servicios públicos de competencia de la entidad. De igual forma verificará la observancia del marco jurídico vigente aplicable a los fideicomisos mercantiles.

34. Previo a la autorización de la constitución de los contratos de fideicomiso mercantil, sus reformas, adhesiones o cesiones, la máxima autoridad del ente rector de las finanzas públicas, deberá contar con los informes técnico y jurídico respectivos. (...).”



3.12. ESCRITURA DE REFORMA Y CODIFICACIÓN INTEGRAL DE ESTATUTOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

“ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. - ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-

La Junta General, formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos, es el órgano supremo de la Compañía, y tendrá las siguientes atribuciones: (...)

16.-Aprobar los actos y contratos, inversiones y los gastos, cuya cuantía superen el límite fijado para el directorio y autorizar al presidente ejecutivo de la compañía a suscribir los actos y contratos correspondientes (...)

“ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. - DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.

“Son deberes y atribuciones del Directorio: (...) 4 Conocer la proforma presupuestaria Anual y el flujo de fondos, los informes administrativos, financieros y contables, y, con sus recomendaciones, elevarlos a resolución de Junta General de Accionistas (...)”

“ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO. - ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE EJECUTIVO.

Son atribuciones del Presidente Ejecutivo: 3. Cumplir y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias, reglamentarias y las resoluciones de la Junta General de Accionistas (...)

IV.- ANÁLISIS JURÍDICO:

Con base en los antecedentes expuestos y en el marco normativo citado, se emite el siguiente análisis jurídico, circunscrito exclusivamente a la **procedencia normativa** de la constitución del fideicomiso dispuesto por el Decreto Ejecutivo Nro. 32, sin que ello implique pronunciamiento alguno sobre aspectos técnicos, financieros, operativos o de sostenibilidad económica, los cuales corresponden a las áreas competentes de la Empresa.

El principio de **seguridad jurídica**, previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el **principio de juridicidad** consagrado en el artículo 14 del Código Orgánico Administrativo, exige que toda actuación administrativa se fundamente en normas previas, claras, públicas y aplicadas por autoridades competentes, garantizando la previsibilidad de la actuación estatal y la confianza legítima de los administrados.

Este mandato se concreta a través del **principio de legalidad** previsto en el artículo 226 de la Constitución, conforme al cual las instituciones del Estado, sus autoridades y quienes ejerzan potestades públicas solo pueden actuar dentro del



ámbito de las competencias, fines y procedimientos que les atribuyen la Constitución y la ley, bajo un régimen de vinculación positiva al Derecho.

Por su parte, el artículo 227 de la Constitución concibe a la Administración Pública como un servicio a la colectividad, sometido a los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, coordinación, planificación, transparencia y evaluación, los cuales operan como parámetros de control de legalidad y mérito administrativo, especialmente cuando se trata de decisiones que inciden en la administración de recursos públicos.

Los artículos 286 y 287 de la Constitución establecen un marco de disciplina fiscal que obliga a las entidades públicas a gestionar las finanzas de forma responsable, sostenible y transparente, garantizando que los egresos permanentes se financien con ingresos permanentes y que toda obligación financiada con recursos públicos identifique claramente su fuente de financiamiento.

Desde esta perspectiva, la utilización de instrumentos financieros como el fideicomiso mercantil es jurídicamente admisible en tanto se encuentre debidamente motivada, se alinee con la planificación institucional y cuente con las autorizaciones exigidas por el régimen de finanzas públicas, sin que la Asesoría Jurídica se pronuncie sobre la suficiencia o sostenibilidad de los flujos comprometidos.

El artículo 314 de la Constitución atribuye al Estado la responsabilidad de asegurar la provisión del servicio público de energía eléctrica bajo criterios de continuidad, calidad, accesibilidad, regularidad y seguridad. A su vez, el artículo 315 faculta la constitución de empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, dotadas de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera.

En este marco, la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. – EEASA–, aun cuando mantiene su naturaleza de sociedad anónima para efectos societarios, se encuentra sujeta al régimen propio de las empresas públicas para los aspectos tributarios, fiscales, laborales, contractuales, de control y de funcionamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 y en la Disposición Transitoria Segunda, numeral 2.2.1.5, de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

En consecuencia, las decisiones contractuales y financieras de la Empresa deben orientarse al cumplimiento de la finalidad pública del servicio eléctrico, observando los principios de legalidad, sostenibilidad financiera, transparencia y control.

De conformidad con los artículos 109 y 110 del Código Orgánico Monetario y Financiero, el fideicomiso mercantil constituye un negocio jurídico mediante el cual una o más personas transfieren, de manera temporal e irrevocable, la titularidad



fiduciaria de bienes o derechos a un patrimonio autónomo, dotado de personalidad jurídica, para el cumplimiento de una finalidad específica.

La principal característica del fideicomiso mercantil es la **segregación patrimonial**, en virtud de la cual los bienes fideicomitidos se separan del patrimonio del constituyente, del fiduciario y de terceros, quedando afectados exclusivamente a la finalidad pactada. Esta figura permite una administración profesional de los recursos, sujeta a deberes de diligencia, lealtad y rendición de cuentas por parte de la fiduciaria, y resulta jurídicamente idónea para garantizar trazabilidad, transparencia y control en la gestión de fondos públicos.

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su Reglamento establecen que la gestión de recursos públicos a través de fideicomisos requiere autorización previa del ente rector de las finanzas públicas. En particular, el artículo 181 del Reglamento del COPLAFIP dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas debe emitir un informe previo sobre la conveniencia de administrar dichos recursos mediante fideicomiso, considerando aspectos como el impacto presupuestario, la fuente de financiamiento, los costos y comisiones, la gestión de riesgos, la estructura de control y la sostenibilidad financiera.

De manera concordante, la Norma Técnica del Sistema Nacional de Finanzas Públicas NTT-14 establece los requisitos, procedimientos y condiciones para la autorización de fideicomisos mercantiles constituidos por entidades del sector público, reforzando el principio de control fiscal y responsabilidad en la administración de recursos públicos.

La Disposición Transitoria Décima Quinta del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, incorporada mediante el artículo 35 del Decreto Ejecutivo Nro. 32, publicado en el Registro Oficial Nro. 62-8S de 18 de junio de 2025, establece de forma expresa y obligatoria que las empresas de distribución deberán constituir un fideicomiso dentro del plazo de ciento ochenta (180) días contados desde la entrada en vigencia de las reformas introducidas.

Dicha disposición determina que el fideicomiso se integre con el aporte de la totalidad de la recaudación del usuario final correspondiente al servicio público de energía eléctrica y al servicio de alumbrado público general, con la finalidad específica de asegurar el cumplimiento del orden de prelación de pagos definido por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad – ARCONEL, en el marco del Procedimiento Operativo de Pagos del Sector Eléctrico.

La norma excluye expresamente de la recaudación fideicomitada los valores recaudados por cuenta de terceros, así como los otros ingresos propios de la empresa de distribución, los cuales deberán ser entregados íntegramente a sus beneficiarios o permanecer en la esfera patrimonial de la distribuidora.



respectivamente. Esta delimitación precisa el alcance objetivo del fideicomiso y refuerza los principios de segregación patrimonial, trazabilidad de los recursos y seguridad jurídica.

Desde el punto de vista jurídico, la referida disposición configura una **obligación reglamentaria de cumplimiento obligatorio**, sin que la Empresa pueda excusarse en criterios de conveniencia administrativa, correspondiendo a las áreas competentes evaluar su impacto técnico, financiero y operativo.

Sin perjuicio del carácter obligatorio de la constitución del fideicomiso dispuesto por la normativa sectorial eléctrica, resulta necesario analizar la competencia de los órganos societarios de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. para la adopción de dicha decisión.

De conformidad con el Estatuto vigente de la EEASA, aprobado mediante escritura pública de 14 de junio de 2013, la **Junta General de Accionistas** constituye el órgano supremo de la sociedad y se encuentra expresamente facultada para aprobar los actos y contratos que comprometan el patrimonio, la estructura financiera o las decisiones estratégicas de la Compañía, así como para autorizar al Presidente Ejecutivo la suscripción de dichos instrumentos, conforme a lo previsto en el artículo Décimo Séptimo, número 16, del Estatuto.

La constitución de un fideicomiso, en tanto implica la afectación de flujos económicos relevantes, la segregación patrimonial de ingresos y la asunción de obligaciones contractuales de carácter estructural y de mediano y largo plazo, excede el ámbito de los actos de gestión ordinaria, razón por la cual requiere el conocimiento y autorización expresa de la Junta General de Accionistas, sin perjuicio de la intervención previa del Directorio en el ámbito de sus atribuciones.

En consecuencia, desde una perspectiva estrictamente jurídica, la constitución del fideicomiso dispuesto por el Decreto Ejecutivo Nro. 32 resulta normativamente viable y obligatoria, siempre que se observen las autorizaciones previstas en el régimen de finanzas públicas y se respeten las competencias de los órganos societarios de la EEASA.

V.- CONCLUSIONES:

En virtud de los antecedentes, del marco normativo y del análisis jurídico expuesto en el presente informe, esta Asesoría Jurídica, en el ámbito de sus funciones, deberes y atribuciones, concluye lo siguiente:

5.1.- De conformidad con la Disposición Transitoria Décima Quinta del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, incorporada mediante Decreto Ejecutivo Nro. 32, la constitución del fideicomiso por parte de las empresas de distribución eléctrica constituye una obligación



normativa de cumplimiento obligatorio, dentro del plazo establecido, con el objeto de asegurar el cumplimiento del orden de prelación de pagos definido por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad – ARCONEL.

5.2.- El marco constitucional, legal y reglamentario analizado —en particular la Constitución de la República, el Código Orgánico Monetario y Financiero, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, su Reglamento General y la normativa del Sistema Nacional de Finanzas Públicas— habilita jurídicamente el uso del fideicomiso mercantil como instrumento válido para la administración de recursos públicos, siempre que se cuente con la autorización del ente rector de las finanzas públicas y se observen los principios de legalidad, sostenibilidad fiscal, transparencia y segregación patrimonial.

5.3.- La normativa sectorial eléctrica define de manera expresa el alcance objetivo del fideicomiso, delimitando los recursos que deben integrarlo —recaudación del usuario final por energía eléctrica y alumbrado público general— y excluyendo de forma clara los valores recaudados por cuenta de terceros y los otros ingresos propios de la empresa de distribución, lo cual resulta coherente con los principios de seguridad jurídica, trazabilidad y correcta administración de recursos públicos.

5.4.- Desde la perspectiva estrictamente jurídica, la constitución del fideicomiso resulta viable, en tanto se trata de un mandato reglamentario expreso y de un instrumento reconocido por el ordenamiento jurídico ecuatoriano para la gestión de recursos públicos en sectores estratégicos, condicionado al cumplimiento de los procedimientos y autorizaciones previstos en la normativa financiera y sectorial.

5.5.- No obstante, considerando la naturaleza societaria de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., que subsiste como sociedad anónima para efectos societarios conforme a la Disposición Transitoria Segunda numeral 2.2.1.5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, y de acuerdo con su Estatuto Social vigente, la constitución del fideicomiso constituye un acto que compromete flujos económicos relevantes y la estructura financiera de la Compañía, por lo que excede el ámbito de la gestión ordinaria.

5.6.- En consecuencia, la adopción de dicha decisión requiere la intervención y autorización de los órganos societarios competentes, en observancia del Estatuto Social de la EEASA, sin perjuicio de las autorizaciones externas que correspondan conforme al régimen de finanzas públicas.

5.7.- El presente análisis jurídico se circunscribe exclusivamente a la viabilidad jurídica y procedencia normativa de la constitución del fideicomiso, sin pronunciarse sobre la conveniencia técnica, financiera u operativa del instrumento, **B**



las cuales deberán ser evaluadas y sustentadas por las áreas competentes de la Empresa.

VI. RECOMENDACIONES

6.1.- Que la Presidencia Ejecutiva, de conformidad con lo previsto en el artículo cuadragésimo primero, número 3 del **ESTATUTO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.**, eleve al Directorio el informe técnico-financiero, así como el presente pronunciamiento jurídico.

6.2.- Que el Directorio, en ejercicio de la atribución prevista en el artículo Trigésimo Séptimo número 4 del **ESTATUTO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.**, conozca los referidos documentos a fin de elevarlos a Junta General de Accionistas.

6.3.- Que la Junta General de Accionistas, en su calidad de órgano supremo de la sociedad, y conforme a las atribuciones establecidas en el artículo Décimo Séptimo número 16 del **ESTATUTO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.**, autorice la constitución del fideicomiso de administración de pagos del sector eléctrico y faculte al Presidente Ejecutivo a realizar los trámites pertinentes, observando la normativa legal aplicable.

6.4.- Que, previo a la suscripción del contrato de fideicomiso, se obtenga la autorización del ente rector de las finanzas públicas, conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, su Reglamento y la normativa técnica vigente del Sistema Nacional de Finanzas Públicas.

Atentamente,


Ab. Daniela Gordillo, Mg.
ASESORA JURÍDICA

DGR/

Copia: Archivo